

5.ª A falta de concursantes funcionarios provinciales o de Hacienda la vacante se proveerá por turno libre entre los aspirantes que lo soliciten que sean mayores de edad, de nacionalidad española, de buena conducta, carezcan de antecedentes penales y sean personas adictas al Movimiento Nacional.

La Excm. Diputación Provincial se reserva la facultad de apreciar discrecionalmente los méritos que se aleguen por los concursantes de este turno.

6.ª Las solicitudes para tomar parte en el concurso se presentarán en la Secretaría de la Excm. Diputación, durante las horas de oficina y plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Bastará con que los solicitantes manifiesten en sus instancias, enumerándolas, que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para tomar parte en el concurso, relacionando además, con el debido detalle, los motivos de preferencia que aleguen.

El que resulte nombrado deberá justificar documentalmente en el plazo de treinta días siguientes a su designación que reúne las condiciones exigidas para tomar parte en el concurso y cuantos méritos y motivos de preferencia haya alegado. De ser funcionario provincial o de Hacienda deberá presentar en el mismo plazo certificación relativa a su expediente personal, con indicación de haber sufrido o no corrección disciplinaria, y caso afirmativo, el motivo de la misma.

7.ª La retribución del Recaudador viene fijada en función de los siguientes premios:

*En voluntaria:*

El 3,50 por 100 de la recaudación en dicho período.

*En ejecutiva:*

a) El 50 por 100 de las participaciones que en recargos de apremio por recaudación ejecutiva de valores en recibos y certificaciones de descubiertos corresponden a la Excm. Diputación en su carácter de Entidad concesionaria del servicio.

b) El cinco por ciento de recargos de apremio de las certificaciones de débitos de otros Organismos, cargadas a través de la Tesorería de Hacienda.

*Premio de buena gestión:*

La recompensa especial por incremento de recaudación a que se refiere el artículo 195 del Estatuto de Recaudación se abonará íntegramente al Recaudador, siempre que éste no hubiere incurrido en corrección disciplinaria determinante de la pérdida de este premio.

Garantizado al Recaudador el beneficio mínimo de 175.000 pesetas que corresponde a la Zona recaudatoria objeto de este concurso, por venir clasificada en tercera categoría; la excelentísima Diputación se reserva el derecho de modificar los mencionados premios de cobranza, tanto en el supuesto de que por variaciones esenciales en los cargos o en los gastos calculados para su fijación, aquéllos no llegasen a cubrir dicho mínimo; así como también en el caso de que lo rebase excesivamente.

A los indicados efectos, el Recaudador vendrá obligado a contabilizar los productos y gastos de la Zona, conservando los oportunos justificantes a disposición de la Corporación provincial.

8.ª La fianza que habrá de garantizar la gestión del Recaudador que resulte nombrado se fija en la cifra de 276.000 pesetas, equivalente al 3 por 100 del promedio de los cargos de voluntaria en el bienio anterior.

Tratándose de funcionarios provinciales o de Hacienda, la fianza podrá constituirse en metálico, valores, o bien íntegramente con póliza de la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución, que deberá consignar, de modo expreso que el afianzamiento alcanza a todas las responsabilidades imputables al Recaudador que garantiza, incluso a las provenientes de perjuicio de valores, caso fortuito, fuerza mayor o riesgo imprevisible y extraordinario.

En el caso de que el designado lo sea por el turno libre, el 50 por 100 de la fianza habrá de constituirse necesariamente en metálico o valores, formalizada mediante escritura pública, y el otro 50 por 100 podrá serlo en póliza de seguro de la Compañía de Seguros de Crédito y Caución, con los requisitos antes indicados.

La fianza habrá de constituirse necesariamente en el plazo máximo de dos meses, a contar de la fecha del nombramiento. Sin perjuicio del régimen de fianza individual previsto por la presente base, el designado podrá acogerse en su día al sistema de fianza colectiva que tiene en estudio la excelentísima Diputación.

9.ª El nombramiento de Recaudador corresponde a la excelentísima Diputación Provincial, cuya resolución podrá ser impugnada ante el excelentísimo señor Ministro de Hacienda, en la forma y plazo que determina la norma novena del artículo 27 del Estatuto de Recaudación.

Una vez firme el nombramiento y constituida la fianza, el Recaudador nombrado se posesionará de su cargo y si no lo hiciere incurrirá en la sanción prevista por la norma sexta del mencionado artículo 27 del Estatuto.

Los nombrados por los turnos de funcionarios de Hacienda o turno libre no tendrán la consideración de funcionarios provinciales, sin que por consiguiente les alcancen los derechos que a estos corresponden

10. El Recaudador vendrá obligado a efectuar la cobranza, en período voluntario y ejecutivo, de los arbitrios e impuestos provinciales, cuando así lo acuerde la excelentísima Diputación, en las condiciones económicas que vienen fijadas o se fijen en lo sucesivo por el Organismo provincial.

Previa autorización expresa de la Diputación podrá encargarse también de la cobranza de arbitrios, impuesto o recursos de Organismos ajenos al Estado y a la Corporación provincial la que en cada caso fijará las condiciones precisas a tal efecto.

11. Serán de cuenta del Recaudador nombrado las responsabilidades que se deriven del perjuicio de valores, y en general de cuantas se exijan a esta excelentísima Corporación, por su gestión recaudatoria en la zona objeto del concurso, proporcionalmente al tiempo de su gestión y con independencia de cuanto respecto a las circunstancias determinantes de dicha responsabilidad, de este Organismo para con la Hacienda pública, dispone el vigente Estatuto de Recaudación.

12. Para lo no previsto en las precedentes bases, con respecto al concurso y relaciones del Recaudador con la excelentísima Diputación Provincial, se estará a lo que establece el Orden del Ministerio de Hacienda de concesión del servicio a la Corporación provincial, Estatuto de Recaudación vigente, Reglamento del Servicio, disposiciones complementarias en vigor y precedentes establecidos por acuerdos firmes de la excelentísima Diputación.

Las precedentes bases fueron aprobadas por el Pleno de la excelentísima Diputación Provincial en sesión celebrada el día 22 de marzo de 1968.

Málaga, 22 de abril de 1968.—El Presidente, José Marqués Iñiguez.—2.261-A.

*RESOLUCION de la Diputación Provincial de Murcia por la que se transcribe relación de aspirantes admitidos al concurso de selección de méritos convocado para proveer entre Oficiales de la Escala Técnico-administrativa «Ideal» una plaza de Jefe de Negociado.*

Han quedado admitidos al concurso de selección de méritos entre Oficiales de la Escala Técnico-administrativa «Ideal», de esta Corporación, para la provisión de una plaza de Jefe de Negociado, cuya convocatoria fué inserta en el «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial del Estado» de los días 19 y 31 de enero, respectivamente, los siguientes aspirantes:

Don Diego Ruiz Marín.  
Don Clemente García García.  
Don Manuel Pérez Seiquer.

Lo que se hace público en el «Boletín Oficial del Estado» a los efectos prevenidos en el Decreto de 10 de mayo de 1957. Murcia, 23 de abril de 1968.—El Presidente.—2.744-E.

*RESOLUCION del Ayuntamiento de Baracaldo referente a la provisión en propiedad de siete plazas de Chóferes municipales.*

Primera.—Relación de aspirantes:

*Admitidos*

D. Andrés Turrientes Quintana.  
D. Santiago Hernández Brioso.  
D. Pedro Fernández Rodríguez.  
D. Víctor Varona Castresana.  
D. Rafael Troyano Fontalba.  
D. Eduardo Marchena Bazán.  
D. José Marina Fernández.

*Excluido*

D. José Luis Rilo Ares, por exceder de la edad preestablecida.

Segunda.—Tribunal que ha de juzgar los ejercicios:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde, don Luis Díez Marín.  
Presidente suplente: El primer Teniente de Alcalde, don Nicolás Larburu Arrizabalaga.

Vocal: El ilustrísimo señor don Luis Martí Ballester, Jefe provincial en Vizcaya del Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, en representación de la Dirección General de Administración Local.

Vocal: Don José Luis Fernández Ruiz, Doctor en Derecho, representante del Profesorado oficial del Estado. Suplente: Don José Luis Redondo Díaz, Licenciado en Derecho.

Vocal: Don Angel Revilla Marina, Jefe del Parque Móvil de Baracaldo.

Vocal: Don Julián Agut y Fernández Villa, Secretario general del Ayuntamiento.

Secretario: El Oficial Mayor del Ayuntamiento, don Nicolás Pérez Santurtún.

Tercera.—La pruebas de aptitud tendrán lugar el día 4 de junio próximo, a las diez y media de la mañana, en el salón de la Biblioteca Municipal (piso sexto de la Casa Consistorial), sirviendo la presente de citación a los interesados, en único llamamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de las bases cuarta, quinta y sexta de la convocatoria y a los efectos de los recursos de reposición e impugnación que puedan producirse.

Baracaldo, 25 de abril de 1968.—El Alcalde, Luis Díez.—2.267-A.

*RESOLUCION del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca a los señores admitidos a las oposiciones para cubrir en propiedad una plaza de Oficial del Cuerpo Técnico Administrativo de esta Corporación.*

Transcurrido el plazo reglamentario de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del día 8 de noviembre último de la lista de admitidos y composición del Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Oposiciones y Concursos de 10 de mayo de 1957, se convoca a los señores admitidos para la práctica del primer ejercicio, que tendrá lugar en estas Casas Consistoriales el día 30 de mayo próximo, a las once horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 1968.—El Secretario general, Tomás Hernández y Hernández.—V.º B.º: El Alcalde accidental, Jesús Hernández Perera.—2.263-A.

### III. Otras disposiciones

## MINISTERIO DE JUSTICIA

*RESOLUCION de la Dirección General de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador don Felipe Cubas Albernis, en representación del Banco Español de Crédito, contra calificación del Registrador de la Propiedad número 3 de Sevilla.*

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador don Felipe Cubas Albernis, en representación del Banco Español de Crédito, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 3 de Sevilla a practicar la prórroga de una anotación preventiva de embargo ordenada en mandamiento judicial, pendiente en este Centro en virtud de apelación del funcionario calificador.

Resultando que en procedimiento ejecutivo seguido a instancia del Banco Español de Crédito contra don José Manuel Martínez Suárez y otro sobre reclamación de doscientas cuarenta y un mil setecientas sesenta y nueve pesetas con treinta y un céntimos de principal, más cien mil pesetas por intereses, costas y gastos, por providencia de 7 de diciembre de 1962 se decretó el embargo de una finca del nombrado deudor, que fué anotado en el Registro mediante la presentación del correspondiente mandamiento el día 12 de febrero de 1963, y que con fecha 24 de enero de 1967, la parte demandante solicitó del Juzgado que entendía del procedimiento la prórroga de la citada anotación y el Juez accedió a lo pedido;

Resultando que presentado en el Registro el día 27 del mismo mes el oportuno mandamiento, fué retirado para liquidación y pago del impuesto correspondiente y, cumplida esta formalidad, se presentó de nuevo el 21 de marzo, siendo entonces calificado con la siguiente nota: «No admitida la anotación de prórroga ordenada en el precedente mandamiento porque, estableciendo el artículo 86 de la Ley Hipotecaria que las anotaciones preventivas podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años, siempre que la prórroga sea anotada antes de que caduque el asiento, tal anotación no puede practicarse en razón a que siendo presentado dicho mandamiento en este Registro con fecha 27 de enero último, retirado el mismo día por su presentante y devuelto el día 21 de marzo último, habían caducado en este último día los cuatro años desde la fecha en que tuvo lugar la anotación que se prorroga, que es la de 12 de febrero de 1963, no bastando que la prórroga haya sido acordada ni que el mandamiento haya sido presentado antes de vencer la anotación prorrogada. Y siendo insubsanable dicho defecto, no procede tomar anotación de suspensión»;

Resultando que el Procurador don Felipe Cubas Albernis, en representación del Banco Español de Crédito, interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación y alegó: que el obstáculo señalado por el Registrador es que el mandamiento fué presentado definitivamente cuando ya había caducado la anotación, según los términos del artículo 86 de la Ley Hipotecaria; que el párrafo final de este precepto dice que mediante mandamiento de las Autoridades que las decretaron, las anotaciones «podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años, siempre que la prórroga sea anotada antes de que caduque el asiento»; que si lo piden en forma los interesados o lo ordena la autoridad competente, no hay duda de que la prórroga debe anotarse; que presentado oportunamente el documento adecuado, no puede quedar a merced del Registrador o de sus Oficiales la práctica del correspondiente asiento, que puede demorarse in-

cluso por exceso de trabajo en la oficina; que la interpretación que hace el Registrador del precepto mencionado, condiciona la eficacia del mandamiento judicial a un plazo distinto del señalado en la Ley, pues habría que tener en cuenta el plazo para calificar y el de liquidación del impuesto, que es muy aleatorio; que, por añadidura, el artículo 225 de la Ley Hipotecaria dispone que, una vez presentado un documento, podrá retirarse para liquidación del impuesto, surtiendo efecto el asiento definitivo desde la fecha de su inicial presentación, siempre que aquél vuelva a la oficina dentro del plazo de vigencia del primer asiento, que podrá incluso ver ampliada su duración normal de sesenta días, cuando se acredite debidamente que no ha podido hacerse efectivo el impuesto en tal tiempo; que el aludido artículo 225 no contiene excepción alguna, por lo que presentado el mandamiento que ordena la prórroga el 27 de enero y devuelto una vez extendida la nota liquidatoria, para la que fué retirado, antes de los sesenta días de su presentación, para todos los efectos es como si estuviese en el Registro desde el 27 de enero; que la caducidad de las anotaciones preventivas tiene por objeto eliminar del Registro asientos con vigor sólo aparente, correspondientes a derechos extinguidos sin ninguna validez, y fué introducida, con carácter general, a los cuatro años, por la reforma hipotecaria de 1944, con las excepciones del párrafo final del artículo 209 y del artículo 161, así como del segundo párrafo del 199 del Reglamento Hipotecario, tras la reforma de 1959; que ello induce a pensar, como explica la doctrina, que para conseguir la prórroga basta solicitarla en forma antes de haber transcurrido el término señalado y que, analógicamente, será aplicable a la misma el artículo 204 del Reglamento Hipotecario que establece que, para que surta efectos, basta con que se presente en el Registro el mandamiento antes de que haya caducado el primer plazo; que a la misma conclusión se llega aplicando el artículo 24 de la Ley Hipotecaria, a tenor del cual, la fecha de la inscripción para los efectos que debe producir es la del asiento de presentación; que si no ocurriese así, no tendría objeto este asiento y la consignación de su fecha en el diario; que la jurisprudencia registral había proclamado en diversas ocasiones la conveniencia de no sujetar a caducidad las anotaciones judiciales, y en el preámbulo del Decreto de 17 de marzo de 1959 se dice que la prórroga de vigencia de las anotaciones preventivas ordenadas por la autoridad judicial en determinadas circunstancias estaba impuesta por la experiencia y era unánimemente solicitada para impedir que la caducidad de tales asientos se convirtiera en arma inadmisiblemente de litigantes de mala fe, salvándose además con la reforma la falta de concordancia entre los artículos 83 y 86 de la Ley Hipotecaria, y que la reforma indicada se establece en el párrafo segundo del artículo 199 del Reglamento Hipotecario, del que se infiere, en relación con el párrafo citado del preámbulo, que las anotaciones judiciales están sometidas a dicha autoridad más que a la gubernativa del Registro y, por consiguiente, que para su prórroga habrá de tenerse en cuenta con preferencia el artículo 86 de la Ley Hipotecaria en su interpretación extrema, el 306 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 83 de aquélla, en el sentido de que la prórroga que se ordene no tiene una duración de otros cuatro años, sino que es indefinida hasta que recaiga resolución judicial firme;

Resultando que el Registrador informó: que las anotaciones preventivas, por su carácter de asientos provisionales, se extinguen, entre otras causas, por caducidad (artículo 77 de la Ley Hipotecaria); que la de embargo caduca al transcurrir cuatro años (artículo 86); que, no obstante, podrá prorrogarse por otros cuatro años más «siempre» que tal prórroga se anote «antes de que caduque el asiento»; que los términos de la Ley son claros,